



## Aurkibidea

I.  
Gidaren edukia eta zer  
entitateentzat egin den

II  
Zuzenbide publikoko korporazioen  
tipologia: lege esparrua

III  
Zuzenbide publikoko korporazioak  
GFLAN: publizitate aktiboa eta  
informazio publikoa eskuratzeko  
eskubidea

IV  
Gardentasunari buruzko foru legea  
aplikatzean zuzenbide publikoko  
korporazioak lotzen dituen eremu  
objektiboa

# Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua

## GARDENTASUNARI ETA INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEARI buruzko gida ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOENTZAT

# Consejo de Transparencia de Navarra

## GUÍA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA dirigida a las CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO

## Índice

I.  
Contenido de la guía y  
entidades a las que se dirige

II  
Tipología de corporaciones  
de derecho público: marco  
legal

III  
Las corporaciones de  
derecho público en la LFT:  
publicidad activa y derecho  
de acceso a la información  
pública

IV  
Ámbito objetivo al que  
quedan sujetos las  
corporaciones de derecho  
público en aplicación de la  
Ley Foral de Transparencia

# Índice

I		
	<b>CONTENIDO DE LA GUÍA Y ENTIDADES A LAS QUE SE DIRIGE</b> .....	5
II		
	<b>TIPOLOGÍA DE CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO: MARCO LEGAL</b> ...	7
	1. COLEGIOS PROFESIONALES. LEY FORAL 3/1998, DE 6 DE ABRIL, DE COLEGIOS PROFESIONALES DE NAVARRA .....	7
	2. CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN .....	7
	3. CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE NAVARRA .....	8
	4. NOTAS COMUNES A LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO .....	8
III		
	<b>LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO EN LA LFT: PUBLICIDAD ACTIVA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b> .....	11
	1. ENCUADRE REGULATORIO .....	11
	2. NATURALEZA MIXTA (PÚBLICO-PRIVADA) DE LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO. ACTOS SUJETOS A DERECHO ADMINISTRATIVO .....	11
IV		
	<b>ÁMBITO OBJETIVO AL QUE QUEDAN SUJETOS LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO EN APLICACIÓN DE LA LEY FORAL DE TRANSPARENCIA</b> .....	13
	1. <b>PUBLICIDAD ACTIVA</b> .....	13
	A. Principios de la publicidad activa (art. 5 LFT) .....	13
	B. Obligaciones de publicidad activa .....	13
	C. Mapa de obligaciones .....	14
	2. <b>DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b> .....	18
	A. Ejercicio del derecho de acceso a la información .....	18
	B. Notas sobre el procedimiento de ejercicio del derecho .....	19
	C. Ámbitos materiales de los que pueden proyectarse el ejercicio del derecho de acceso a la información pública .....	19

Título: GUÍA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO

© 2019. CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA

Composición: Pretexto

# I CONTENIDO DE LA GUÍA\* Y ENTIDADES A LAS QUE SE DIRIGE

El artículo 2.3 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFT) establece que, «en el ejercicio de la actividad sujeta al Derecho Administrativo, es aplicable a entidades de Derecho público o entidades sobre las que la Comunidad Foral ejerza competencia conforme a la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra: Colegios profesionales, Cámara de Comercio, denominaciones de origen, federaciones deportivas y corporaciones de Derecho público».

El Consejo de Transparencia de Navarra, órgano regulado por la LFT, tiene atribuida como una de sus funciones la de promover actividades de formación y sensibilización en materia de transparencia y de acceso a la información pública. Con el fin de ayudar en la tarea de plena adaptación a los mandatos contenidos en la LFT, el Consejo de Transparencia de Navarra ha elaborado la presente guía o modelo a fin de que sea de utilidad a las corporaciones de derecho público en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les impone la LFT. El objeto de esta guía es plasmar en un documento y con ca-

rácter meramente orientativo la información más relevante y detallada que se entiende necesaria para impulsar el desarrollo de una cultura de transparencia y, particularmente, estimular a las corporaciones al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFT.

En lo que hace a publicidad activa, según la disposición adicional tercera de la LFT, deben adoptar las medidas necesarias para que la información derivada de las nuevas obligaciones de publicidad activa previstas en la LFT esté disponible en la correspondiente sede electrónica o página web, en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de la LFT; plazo que finaliza el 23 de agosto de 2019. En lo que hace al acceso por la ciudadanía a la información pública existente derivada de su actividad de Derecho Administrativo, las disposiciones de la LFT son de plena aplicación desde el 23 de agosto de 2018.

Conforme al contenido y estructura de la guía, en primer lugar, su objetivo es acotar el marco y naturaleza de las corporaciones de derecho público, que, si bien están sujetas a la LFT, no lo están en los mismos términos que las Administraciones Públicas. En segun-

\* Guía adaptada a la legislación foral de la Guía de Transparencia y Acceso a la Información Pública dirigida a los colegios y consejos de los colegios profesionales y demás corporaciones de derecho público, elaborada conjuntamente por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Unión Profesional. Diciembre de 2016.

do lugar, la guía ahonda en los ámbitos a los que quedarían sujetas en cuanto a su adecuación a la LFT «en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo». Se trata de un aspecto que se ha de abordar en

profundidad para acotar de manera adecuada aquellas materias que entran o quedan fuera del ámbito de obligado cumplimiento conforme a lo establecido en la LFT, aportando la mayor certidumbre y seguridad posibles.

## II TIPOLOGÍA DE CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO: MARCO LEGAL

### 1. COLEGIOS PROFESIONALES. LEY FORAL 3/1998, DE 6 DE ABRIL, DE COLEGIOS PROFESIONALES DE NAVARRA

El artículo 36 de la Constitución recoge la figura de los colegios profesionales, encomendando a la Ley que regule sus peculiaridades.

La Ley Foral 3/1998, de 6 de abril, de colegios profesionales de Navarra, establece en su artículo 2 que «Los Colegios Profesionales son Corporaciones de Derecho público, con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines». Y en su artículo 4 dispone:

*Artículo 4. Colaboración con las Administraciones Públicas de Navarra.*

*1. El Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral, que se publicará en el «Boletín Oficial de Navarra», podrá delegar en los Colegios Profesionales de Navarra, el ejercicio de funciones administrativas relacionadas con la respectiva profesión colegiada.*

*El Decreto Foral de delegación deberá determinar el alcance, contenido, duración y condiciones de la misma, así como el control que se reserve el Gobierno de Navarra y los medios personales, materiales y económicos que, en su caso, éste transfiera.*

*En todo caso, el Gobierno de Navarra podrá dictar instrucciones de carácter general y reca-*

*bar, en cualquier momento, información sobre la gestión colegial, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de información o inobservancia de los requerimientos, el Gobierno delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí mismo la competencia delegada.*

*La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Colegio interesado.*

*2. Las Administraciones Públicas de Navarra podrán establecer convenios de colaboración con los Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Navarra para la realización de actividades de interés común.*

### 2. CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN

La Ley Foral 16/2005, de 5 de diciembre, de ordenación vitivinícola establece en su artículo 20.2 que:

*«la gestión de la denominación de origen está encomendada a su Consejo Regulador, en el que estarán representados los productores y comercializadores y tendrá la naturaleza de corporación de derecho público a la que se atribuye la gestión de la denominación de origen. Tiene personalidad jurídica propia, autonomía económica, plena capacidad jurídica*

*y capacidad para el cumplimiento de sus funciones. Está sometido al derecho público en lo relativo a su constitución, organización y procedimiento electoral y en las actuaciones que impliquen el ejercicio de funciones o potestades públicas».*

Existen otros Consejos Reguladores de Denominación de Origen o Denominación «Específica» creados conforme a lo dispuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y en su Reglamento, aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, que asumen la defensa de la Denominación Específica, la aplicación de su reglamento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, así como el fomento y control de la calidad del producto amparado.

Así, por ejemplo, la Orden Foral de 23 de febrero de 1987, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes, por la que se ordena la publicación del reglamento de la Denominación Específica «espárrago de Navarra» y de su Consejo Regulador, cuyo artículo 3 dispone que *«La defensa de la Denominación Específica, la aplicación de su Reglamento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, así como el fomento y control de la calidad del espárrago amparado, quedan encomendados al Consejo Regulador de la Denominación Específica»*. Ahora bien, la zona de producción de espárragos amparados por la Denominación Específica «Espárrago de Navarra» está constituida por los terrenos ubicados en Navarra, Aragón y La Rioja que el Consejo Regulador considere aptos para la producción de espárragos con la calidad necesaria. De ahí que El Consejo Regulador es un órgano colegiado dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Dirección General de Política Alimentaria. No parece, por tanto, que la Comunidad Foral ejerza competencia conforme a la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. En consecuencia, este Consejo no quedaría sujeto a la LFT.

Por tanto, ha de estudiarse cada Denominación Específica o de Origen («Queso del Roncal»; «Queso de Urbasa»; «Pimiento del Piquillo de Lodosa»; «Pacharán navarro»; «Alcachofa de Tudela», etc.), una por una.

### 3. CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE NAVARRA

La Ley Foral 17/2015, de 10 de abril, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, establece en su artículo 2.1 que *«La Cámara es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configura como órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas, sin menoscabo de los intereses privados que persigue»*.

### 4. NOTAS COMUNES A LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO

Aunque las corporaciones de derecho público asumen la representación y defensa de estrictos intereses privados, los propios de los miembros de la corporación, su justificación última como personas jurídico-públicas, distintas de las meras asociaciones constituidas en ejercicio del derecho de asociación, radica justamente en el hecho de serles atribuidas en virtud de ley, y, en su caso, añadidamente por delegación de la Administración de la Comunidad Foral, el ejercicio de determinadas funciones públicas. Son precisamente esas funciones públicas, o, más en concreto, la atribución legal directa e inmediata de dichas funciones, las que permiten individualizar a estas organizaciones como corporaciones de derecho público, dando cuenta de su singular régimen de organización y de funcionamiento.

Las corporaciones de derecho público son entidades singulares debido a su doble dimensión; la privada y la pública. La pública responde a una perspectiva orientada al interés público en relación con el ejercicio de actividades privadas; la privada se manifiesta en la defensa de los intereses legítimos de los miembros de la corporación. Así, por ejemplo, según la jurisprudencia los colegios profesionales son equiparados a las Administraciones públicas territoriales en lo que se refiere a la dimensión pública de los colegios, citando esta condición a las funciones que la ley les atribuye.

Finalmente, señalar que el artículo 2.3 de la LFT incluye en el listado de entidades que recoge a las federaciones deportivas de Navarra. Sin embargo, la legislación no reconoce a estas entidades la naturaleza de corporaciones de derecho público, sino que opta por considerarles entidades privadas y al referirse a las funciones públicas que ejercen por delegación las califica de «agentes colaboradores de la Administración Pública». En este sentido se pronuncian los artículos 42 y siguientes de la Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, de Deporte de Navarra. Por tanto, las federaciones deportivas no deben entenderse comprendidas en esta guía.

### III

## LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO EN LA LFT: PUBLICIDAD ACTIVA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

### 1. ENCUADRE REGULATORIO

Según establece el artículo 2.3, las disposiciones de la LFT se aplican a las corporaciones de derecho público *en el ejercicio de la actividad sujeta a Derecho Administrativo*. La delimitación de este concepto y, por lo tanto, del alcance de la aplicación de los preceptos de la LFT a dichas corporaciones públicas, constituyen la premisa de la que debe partirse a la hora de definir las obligaciones que deben ser asumidas por estas entidades.

En primer lugar, debe destacarse que la incorporación de las corporaciones de derecho público al ámbito subjetivo de la LFT en virtud del artículo 2.3 antes mencionado, implica por un lado, que dichas entidades quedan sometidas al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa definidas en el Capítulo III del Título I de la LFT –artículos 18 a 29– en lo que atañe a sus «actividades sujetas a Derecho Administrativo»; y, por otro, que cualquier persona tiene derecho a acceder a la información pública de la que dispongan las mencionadas entidades, entendido dicho concepto de información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren su poder y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones públicas, y previo ejercicio del derecho de acuerdo con el procedimiento

regulado en el Capítulo II del Título III de la LFT –artículos 34 a 44–.

La información que se solicite deberá conectarse, de igual manera, con el límite de la sujeción de los colegios profesionales a la ley, esto es, que se trate de información relativa a «actividades sujetas a Derecho Administrativo». ¿Cuáles son estas actividades? Por ejemplo, la Ley Foral 16/2005, de 5 de diciembre, de ordenación vitivinícola establece en su artículo 20.2 que el Consejo Regulador de la denominación de origen «*Está sometido al derecho público en lo relativo a su constitución, organización y procedimiento electoral y en las actuaciones que impliquen el ejercicio de funciones o potestades públicas*».

### 2. NATURALEZA MIXTA (PÚBLICO-PRIVADA) DE LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO. ACTOS SUJETOS A DERECHO ADMINISTRATIVO

La STS de 7 de marzo de 2011, razona sobre esta cuestión:

*«Esta especial naturaleza de la Administración Corporativa también conlleva un específico régimen jurídico mixto, con normas*

*reguladoras de Derecho Público y otras que necesariamente han de ser calificadas de privadas. La intervención del Estado sobre estos entes corporativos de base privada se inicia con su creación mediante un acto de imperio, por el que se publica en cierto modo el ejercicio de una determinada profesión, acto que, a su vez, le atribuye a la corporación profesional personalidad jurídico-pública con el fin de desempeñar funciones de interés general con carácter monopolístico que se encarga de controlar la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de ello, su función principal no es pública, sino que tiene por fin esencial la gestión de aquellos intereses privativos de sus miembros que derivan del ejercicio de la profesión común, de suerte que, en este último caso, de suscitarse conflictos entre ellos, serán otras Jurisdicciones las encargadas de resolver sus controversias».*

La configuración de diversas entidades como corporaciones de derecho público de base privada que desarrollan funciones públicas, se justifica por el cumplimiento de diferentes intereses públicos, entre los que pueden mencionarse la ordenación del ejercicio profesional, el cumplimiento de las normas deontológicas, el ejercicio de la potestad sancionadora, los recursos procesales, la defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios, etc. (art. 3 de la Ley Foral 3/1998, de 6 de abril, de colegios profesionales de Navarra).

Asimismo, del conjunto de funciones que tienen encomendadas por su ley foral reguladora, sólo pueden considerarse como públicas una parte del total que desempeñan, esto es, aquellas funciones que la ley les atribuye y la Administración de la Comunidad Foral delega en estos entes (p.ej. representación y de-

fensa de los intereses del sector ante las diferentes Administraciones con competencias en la materia; la regulación de la profesión; la colaboración de estas corporaciones con las Administraciones Públicas para el ejercicio de funciones relacionadas con el sector; las funciones que le haya podido delegar la Administración, etc.), dado que el resto son funciones dirigidas al interés particular.

De este modo, se puede sostener que sólo el ejercicio de dichas funciones públicas es el que se sujeta a Derecho Administrativo y, en concreto, a la legislación sobre procedimiento administrativo y, además, solo los actos dictados en el cumplimiento de tales funciones públicas que tienen atribuidas son susceptibles de recurso contencioso-administrativo.

En este sentido, cabe recordar que están sujetos a Derecho Administrativo los actos relativos a la organización y funcionamiento de las corporaciones y el ejercicio de las funciones administrativas que tienen atribuidas por la legislación que las rige o que les han sido delegadas por otras Administraciones Públicas. A estos efectos, el artículo 2.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que *«las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por esta Ley»*. Por otra parte, el artículo 2.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone que *«el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con [...] los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas»*.

## IV ÁMBITO OBJETIVO AL QUE QUEDAN SUJETOS LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO EN APLICACIÓN DE LA LEY FORAL DE TRANSPARENCIA

### 1. PUBLICIDAD ACTIVA

#### A. Principios de la publicidad activa (art. 5 LFT)

Como a todas las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la LFT, los principios generales previstos en el artículo 5 de la LFT les son de aplicación a las corporaciones de derecho público. Dichos principios generales en lo que hace a la publicidad activa pueden resumirse en los siguientes:

- a) Deben proporcionar y difundir constantemente, de una forma veraz y objetiva, la información que obra en su poder relativa a su actividad sujeta a Derecho Administrativo, ya que esa información en su poder, custodia o bajo su control se presume pública, salvo las excepciones previstas en la ley.
- b) El cumplimiento de las obligaciones de publicación activa debe realizarse por medios electrónicos, utilizando y promoviendo software de código abierto, así como el uso de estándares abiertos y neutrales en materia tecnológica e informática.
- c) La información se ha de publicar de manera clara, estructurada, accesible y comprensible.

- d) En la publicación de la información se debe tener en cuenta los límites a la obligación de transparencia establecidos en el artículo 31 de la LFT y, especialmente, el derecho a la protección de datos de carácter personal.

#### B. Obligaciones de publicidad activa

Para cumplir debidamente con sus obligaciones de transparencia, las corporaciones de derecho público, conforme establece el artículo 11 de la LFT, deben:

- a) Elaborar, mantener actualizada, al menos con una periodicidad trimestral, y difundir de forma permanente, veraz y objetiva, a través de sus respectivas sedes electrónicas o páginas web, la información cuya divulgación garantice la transparencia de su actividad sujeta a Derecho Administrativo.
- b) Elaborar y difundir, con una periodicidad trimestral, un inventario de la información pública referida en la letra a) con indicación de dónde puede encontrarse dicha información.
- c) Desarrollar sistemas y políticas de gestión de la información pública que garanticen su fiabilidad, actualización permanente, integridad y autenticidad.



- d) Adoptar las medidas de gestión de la información pública que hagan fácil su localización y divulgación y fomenten la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad, el control de la veracidad y la reutilización de la información publicada.
- e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible. Deberá estar disponible en formatos que resulten accesibles y comprensibles, conforme a los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.
- f) Difundir los derechos que reconoce la LFT a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.
- g) La información pública deberá permanecer publicada durante los siguientes plazos:
- La información que describa situaciones de hecho se mantendrá publicada, al menos, mientras estas subsistan.
  - La información sobre normas, al menos, mientras estas mantengan su vigencia.
  - La información sobre contratos, convenios y subvenciones, mientras persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, diez años después de que estas cesen.
  - La información económica al menos durante diez años a contar desde el momento en el que fue generada.

### C. Mapa de obligaciones

Los listados que se describen seguidamente han de entenderse, en aplicación de la LFT, como obligaciones mínimas de información pública, pues, además, según dispone el artículo 29, será objeto de publicación cualquier otra información pública que se considere de

interés para la ciudadanía y, en particular, aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. A lo que hay que añadir las obligaciones de publicidad establecidas en otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad (art. 18.2). Conforme al artículo 7, la información debe hacerse pública en las páginas web de las corporaciones. Para ello, parece lo más aconsejable crear un Portal de Transparencia en la sede electrónica o página web de la corporación de derecho público.

Seguidamente, a título meramente orientativo, se describen los ítems que conforman el mapa de obligaciones de publicidad activa de las corporaciones de derecho público.

#### a) Información institucional, organizativa y de relevancia jurídica

- a) Las funciones que desarrollan, la normativa de aplicación y su estructura organizativa interna con inclusión de un organigrama actualizado, señalando la sede de sus órganos y los distintos medios de contacto.
- b) Las actas de las reuniones de las Juntas de Gobierno.

Respecto de las actas de las Juntas de Gobierno de los Colegios Profesionales, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6, mediante sentencia de 23 de febrero de 2018 (procedimiento ordinario 35/2017), ha declarado que «Es claro que la actividad relativa al régimen de funcionamiento de la Junta de Gobierno, de su convocatoria, régimen de acuerdos y, más en concreto, la documentación de los acuerdos que se adopten por los órganos de gobierno colegiales es una actividad de derecho público, pues así resulta de la aplicación supletoria de la Ley 40/2015, a la que se remite el art. 99.2 del Real Decreto

658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. Por lo tanto, la información recogida en dichas actas es información pública y debe ser puesta a disposición de los peticionarios, con el solo límite impuesto por la garantía de la protección de datos, pues no es admisible que se alegue, sin acreditar ni probar lo afirmado, que en las actas se encuadran asuntos sujetos al derecho administrativo y otros de derecho privado».

#### b) Información económica, presupuestaria y estadística

Se especifican a continuación qué información y con qué alcance deben publicar las corporaciones de derecho público en cumplimiento de este precepto:

##### • Contratos públicos

¿Son las corporaciones de derecho público poderes adjudicadores?

Ha señalado reiteradamente la jurisprudencia europea (por todas, STJUE de 5 de octubre de 2017) que una entidad adquiere la condición de poder adjudicador cuando se cumplen tres condiciones acumulativas, a saber, a) que dicha entidad haya sido creada específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil; b) que esté dotada de personalidad jurídica; y c) que su actividad esté mayoritariamente financiada por los poderes públicos o que su gestión esté controlada por parte de éstos últimos, o que más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, de dirección o de vigilancia sean nombrados por los poderes públicos.

El artículo 4.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, establece que se aplicará a los contratos públicos celebrados por las siguientes entidades:

«e) Las entidades públicas empresariales y entidades de derecho público, consorcios, sociedades mercantiles y laborales, fundaciones u otros entes, o asociaciones de cualesquiera de ellos, dotados de personalidad jurídica, pública o privada, vinculados o dependientes de las entidades mencionadas en los apartados anteriores, en los que concurran **conjuntamente** estos requisitos:

1.º Que en su actividad satisfagan, al menos parcialmente, fines de interés público que no tengan carácter industrial o mercantil y no asuman riesgo empresarial.

2.º Que las Administraciones Públicas financien, directa o indirectamente, más de la mitad de su actividad, o bien tengan influencia dominante sobre las mismas a través de mecanismos que controlen su gestión, o bien permitan designar a más de la mitad de los miembros de sus órganos de administración, de dirección o de vigilancia.»

Respecto a de las corporaciones de derecho público, la Administración de la Comunidad Foral no designa a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia, y tampoco concurre el requisito de que su financiación corra mayoritariamente a cargo de la Administración de la Comunidad Foral ya que se financian mayoritariamente con las cuotas o derramas que abonan sus integrantes y con los productos y rentas que obtienen de las actividades y servicios que organizan a favor de sus miembros y de la sociedad.

Por otra parte, tampoco resulta viable entender que la tutela de la Administración de la Comunidad Foral, a través del control a posteriori que ejerce en relación con algunos de los actos corporativos, llegue a tener una influencia determinante sobre las decisiones de la corporación requeridas por la STJCE de 27 de febrero de 2003, la cual sentó los caracteres generales de este requisito del control de la gestión.



Cabe concluir, por tanto, que las corporaciones de derecho público no quedan sujetas a la Ley Foral de Contratos Públicos porque no cumplen los requisitos mínimos establecidos en el artículo 4.1 para ser poder adjudicador (en este sentido, véase LÓPEZ BENÍTEZ en su trabajo «Algunas consideraciones a propósito del ámbito subjetivo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017. En particular, el caso de las Corporaciones de Derecho público», publicado en DA, nueva época, núm. 4, 2017, p. 140 y ss).

No obstante, toda vez que, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conoce de los actos de las corporaciones de derecho público dictados en ejercicio de sus funciones públicas, y que, por su parte, el artículo 2.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que «las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por esta Ley», cabría concluir también que es obligación de estas publicar y proporcionar el acceso a los contratos mencionados en el artículo 3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, **cuyo objeto sea la proyección del ejercicio de una función pública que le haya sido conferida.**

Además, señala LÓPEZ BENÍTEZ en el citado trabajo, p. 140, «no parece que haya que poner reparos a que, bajo determinadas circunstancias, algunos de los contratos que realicen las Corporaciones de Derecho Público deban quedar –con mayor o menor intensidad– sujetos a la normativa de contratos públicos. Así sucede, desde luego, con los contratos que realicen y que estén subvencionados de forma directa y en más de un 50% por poderes adjudicadores».

En estos casos, publicarán lo siguiente:

- a) Objeto, tipo de contrato y órgano de contratación.
- b) Fecha de formalización.
- c) Fecha de inicio de ejecución.
- d) Duración.
- e) Procedimiento de adjudicación utilizado.
- f) Importes de licitación y de adjudicación.
- g) Número de licitadores participantes, con identificación de los admitidos, excluidos y, en su caso, de los seleccionados en el procedimiento.
- h) Identidad del adjudicatario.
- i) La solvencia técnica y económica del adjudicatario.
- j) Los criterios de adjudicación, tanto los de valoración automática como los sujetos a juicio de valor y su ponderación.
- k) Cuadro comparativo de las ofertas económicas, de las propuestas técnicas y de las mejoras, si procede, con sus respectivas puntuaciones detalladas por cada uno de los criterios, y resumen de la motivación. Acuerdos e informes jurídicos, técnicos y de intervención económica relacionados con el proceso de contratación.
- l) Informes jurídicos, técnicos y de intervención relacionados con el proceso de contratación.
- m) Modificaciones aprobadas, contratos complementarios y las prórrogas de los contratos.
- n) Información sobre la cesión del contrato y la subcontratación, detallando la identidad de los cesionarios o subcontratistas, el importe y el porcentaje del volumen de cada contrato que ha sido subcontratado.
- ñ) Importe de la liquidación practicada a la finalización del contrato.

- o) Información relativa a la revisión de precios, así como a la desviación del coste final de la prestación contratada en relación con el importe adjudicado.

#### • Convenios

Deberán publicarse los convenios firmados por la corporación en ejercicio de las funciones públicas que le hayan sido conferidas. Dicha publicidad incluirá los siguientes conceptos:

- a) Partes firmantes.
- b) Objeto.
- c) Plazo de duración.
- d) Modificaciones realizadas.
- e) Obligaciones, incluidas también en caso de que las hubiera, las económicas derivadas de los mismos.

Respecto a la publicación de información de carácter personal contenida en los contratos y convenios que sean publicados, la corporación debe atenerse a lo dispuesto en el criterio interpretativo núm. 4 de 2015 firmado conjuntamente por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos.

#### • Encomiendas de gestión

En caso de que una corporación de derecho público, en ejercicio de las funciones públicas que desempeñe, realice una encomienda de gestión, esta deberá ser publicada con los siguientes datos:

- a) La entidad a la que se realiza la encomienda y su duración.
- b) Motivos que justifican que no se presen los servicios con los medios personales con que cuenta la corporación pública encomendante y, en su caso, razones que acreditan que no se haya licitado la contratación del servicio de conformidad con lo previsto en la legislación de contratos del sector público.
- c) Medios materiales que la corporación pública haya acordado poner a dispo-

sición de la encomendada para la realización del trabajo.

- d) Número y categorías profesionales de las personas, en su caso, incluidas en cada encomienda, así como el importe total destinado a gastos de personal.
- e) El objeto y las obligaciones económicas de la encomienda, incluyendo las tarifas o precios fijados.
- f) Las modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como la liquidación final de la encomienda.
- g) Las subcontrataciones efectuadas, en su caso, con indicación del procedimiento seguido para ello, la persona o entidad adjudicataria y el importe de la adjudicación.
- h) Se indicará el porcentaje de actividad realizada por el medio propio a favor de los entes de control, en cada ejercicio.

#### • Actos de disposición económica-presupuestaria

Señala la STS, de 7 de marzo de 2011:

*«Sin embargo, como ya anticipamos en el anterior fundamento, se distinguen de las Administraciones Públicas en que la mayor parte de su actividad no se sujeta al Derecho Administrativo: sus empleados no son funcionarios públicos ni sus finanzas se controlan por la Intervención del Estado ni por el Tribunal de Cuentas y con su creación la Administración Territorial lo que pretende esencialmente es una descentralización funcional, por lo que le atribuye fines relacionados con los intereses públicos, evitando crear entes públicos de intervención directa.*

*Es por ello que uno de los elementos coincidentes con asociaciones y sindicatos, expresión además de su naturaleza fundamentalmente privada, es el del sostenimiento económico de la Corporación. Este sostenimiento corresponde a los miembros que forman parte de ella, sin*

*financiación propiamente pública, salvo la que pueda corresponder vía subvenciones. Gozan, por tanto, de autonomía financiera».*

Por tanto, conforme a la consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, las corporaciones de derecho público tienen autonomía financiera y sus finanzas no se controlan ni por la Intervención de la Administración de la Comunidad Foral ni por la Cámara de Comptos. Por lo tanto, cualquier otro acto de ejecución presupuestaria y, en concreto, las subvenciones que concedan, sus presupuestos, cuentas anuales o las retribuciones percibidas por los responsables de la corporación **no puede ser considerada información pública** en el sentido de la LFT y, por lo tanto, su publicación no debe considerarse preceptiva.

No obstante, en un ejercicio voluntario de transparencia, el CTN invita a las corporaciones de derecho público a que hagan público, cuando menos, el presupuesto de ingresos y gastos, las cuentas anuales de la federación, y los informes externos de auditorías.

## 2. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Como entidades a las que es de aplicación la LFT, las corporaciones de derecho público deben responder a las solicitudes de acceso a la información que les presenten siempre que se trate de **información que hayan elaborado u obtenido en ejercicio de sus funciones públicas**.

### A. Ejercicio del derecho de acceso a la información

El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que

solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud.

La solicitud puede presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, sin que resulte necesaria la acreditación de la misma.

La solicitud debe contener la indicación precisa de la información que se solicita, la forma o formato preferido de acceso, y una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.

Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días hábiles, con suspensión del plazo máximo para resolver y con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le podrá tener por desistido, si bien se le debe prestar asistencia para concretar su petición.

Las unidades responsables de la información pública y las oficinas de información, así como el órgano o entidad en el que se presente o al que se dirija la solicitud, cualquiera que sea el medio utilizado para realizarla, deben ofrecer la asistencia que sea necesaria para facilitar el ejercicio del derecho de acceso, teniendo en cuenta las necesidades especiales de algunos colectivos.

La sentencia de 23 de febrero de 2018 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 (procedimiento ordinario 35/2017) ha declarado que «el hecho de que tales materias estén sujetas a obligaciones de publicidad activa no comporta que pueda negarse por esa causa el derecho de acceso de los ciudadanos a la información solicitada, por más que coincida o pueda coincidir con todo o parte de la publicada, pues la propia Ley desdobra las obligaciones impuestas por el principio de transparencia, de manera que, por un lado, exige la publicidad activa... y, por otro, el capítulo III (arts. 12 y ss.) reco-

noce el derecho de acceso a la información pública, sin que este derecho subjetivo quede restringido ni condicionado por el cumplimiento de las obligaciones que resultan de los mandatos de la Ley para la publicidad activa».

### B. Notas sobre el procedimiento de ejercicio del derecho

Los colegios profesionales deben identificar suficientemente en su página web el derecho que asiste a los ciudadanos a pedir información de la que dispongan y ofrecer claramente las vías habilitadas para ejercerlo.

La respuesta debe tener en cuenta la posible aplicación de alguno de los límites al derecho de acceso previstos en el artículo 31 de la LFT o del derecho a la protección de datos de carácter personal del artículo 32, así como alguna de las causas de inadmisión previstas en el artículo 37 de la LFT.

En la respuesta que se proporcione, debe indicarse que es posible presentar reclamación ante el Consejo de Transparencia Navarra en el plazo de un mes desde que se notifica la respuesta a la solicitud o bien recurso contencioso-administrativo ante el juzgado competente en el plazo de dos meses.

El órgano en cada caso competente para resolver debe facilitar la información pública solicitada o comunicar al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla lo antes posible y, a más tardar, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la sociedad pública, con carácter general. En caso de que la negativa a facilitar la información esté fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, se incluirá la referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando esta sea conocida o, alternativamente, al ceden-

te del que se haya obtenido la información solicitada.

Este plazo puede ampliarse por otro mes más, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible emitirla en el plazo antes indicado. En este supuesto, debe informarse al solicitante, dentro del plazo máximo de diez días, de las razones que justifican la emisión de la resolución en dicho plazo.

En caso de que la solicitud pueda afectar derechos o intereses legítimos de terceros, deberá proporcionarse a estos un plazo de quince días para que puedan realizar alegaciones. Dichas alegaciones deberán tenerse en cuenta a la hora de conceder o no la información, pero no pueden considerarse como un veto al acceso.

La solicitud podrá no ser tramitada si se refiere a información que no ha sido creada o recabada en el marco de las funciones públicas ejercidas por la corporación.

### C. Ámbitos materiales de los que pueden proyectarse el ejercicio del derecho de acceso a la información pública

Tal y como se ha indicado con anterioridad, las corporaciones de derecho público quedan sometidas al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa definidas en los artículos 18 a 29 de la LFT en lo que atañe a sus «*actividades sujetas a Derecho Administrativo*» y, asimismo, cualquier persona tiene derecho a acceder a la información pública de la que dispongan las mencionadas entidades respecto a sus «*actividades sujetas a Derecho Administrativo*» previo ejercicio del derecho de acceso –artículos 30 a 44 LFT–.

Entre tales supuestos pueden, a **meros efectos orientativos**, señalarse los siguientes ámbitos materiales sobre los que puede

proyectarse el ejercicio del derecho de acceso a la información pública respecto de actividades de corporaciones de derecho público sujetas a derecho administrativo:

- La información relativa al procedimiento electoral de la corporación de derecho público de que se trate, comprensiva de la información relacionada con el derecho de sufragio activo y pasivo; la convocatoria de elecciones; la presentación de candidaturas; la elaboración del censo electoral; la constitución de la mesa electoral y las facultades de su presidente; las papeletas; la forma de acreditar el voto; el voto por

correo; el escrutinio; la elaboración del acta correspondiente; y, finalmente, la toma de posesión de los candidatos elegidos, con el límite derivado de la garantía de la protección de datos del artículo 32 de la LFT en lo que concierne, a mero título ejemplificativo, al censo electoral.

- Las actas de los órganos colegiados de gobierno, respecto de todas aquellas actividades que se refieran al ejercicio de funciones sujetas a Derecho Administrativo de las previstas en la normativa correspondiente con el límite derivado de la garantía de la protección de datos del artículo 32 de la LFT.

# Aurkibidea

I		
	<b>GIDAREN EDUKIA ETA ZER ENTITATERENTZAT EGIN DEN</b> .....	25
II		
	<b>ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOEN TIPOLOGIA: LEGE ESPARRUA</b> .....	27
	1. LANBIDE ELKARGOAK. NAFARROAKO LANBIDE ELKARGOEI BURUZKO APIRILAREN 6KO 3/1998 FORU LEGEA .....	27
	2. JATORRI DEITURAREN KONTSEILU ARAUEMAILEA .....	27
	3. NAFARROAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ZERBITZU GANBERA .....	28
	4. ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOEI BURUZKO OHAR KOMUNAK .....	28
III		
	<b>ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOAK GFLAN: PUBLIZITATE AKTIBOA ETA INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA</b> .....	31
	1. ARAU-TESTUINGURUA .....	31
	2. ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOEN IZAERA MISTOA (PUBLIKO-PRIBATUA). ZUZENBIDE ADMINISTRATIBOREN MENDEKO EGINTZAK .....	31
IV		
	<b>GARDENTASUNARI BURUZKO FORU LEGEA APLIKATZEAN ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOAK LOTZEN DITUEN EREMU OBJEKTIBOA</b> .....	33
	1. PUBLIZITATE AKTIBOA .....	33
	A. Publizitate aktiboaren printzipioak (GFLaren 5. art.) .....	33
	B. Publizitate aktiboa egiteko betebeharra .....	33
	C. Betebeharren mapa .....	34
	2. INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA .....	38
	A. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen egikaritzea .....	38
	B. Eskubidea egikaritzeko prozeduraren inguruko oharrak .....	38
	C. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen egikaritzea proiektatu dezaketen eremu materialak .....	39

Izenburua: GARDENTASUNARI ETA INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEARI BURUZKO GIDA ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOENTZAT

© 2019. NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUA

Composición: Pretexto

# I GIDAREN EDUKIA\* ETA ZER ENTITATERENTZAT EGIN DEN

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen (hemendik goiti GFL) 2.3 artikulua ezartzen duenaren arabera, «Zuzenbide Administrazioaren mendeko jarduerak betetzean, zuzenbide publikoko entitatei aplikatuko zaie, eta beste zenbait entitatei ere, haien gainean Foru Komunitateak eskumena duenean, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren arabera: Lanbide elkargoak, Merkataritza Ganbera, jatorri deiturak, kirol federazioak eta zuzenbide publikoko korporazioak.»

Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua Gardentasunari buruzko Foru Legeak araututako organoa da, eta haren eginkizunetako bat da gardentasunaren eta informazio publikoa eskuratzeari inguruko prestakuntza eta sentsibilizazio jarduerak sustatzea. GFLak ezarritako aginduetara erabat egokitzeko lana erraztu nahian, Nafarroako Gardentasun Kontseiluak gida edo eredu hau ondu du, zuzenbide publikoko korporazioentzat baliagarria izanen delakoan, GFLak ezartzen dituen gardentasunaren arloko betebeharrak betetzeko unean. Gida honen helburua da dokumentu batean biltzea, orientatzeko besterik ez bada ere, gardentasun kultura bat aurrera eramateko informazio garrantzitsuena eta zehatzena, eta, era berezian, korporazioen motibazioan eragitea, GFLan ezarritako betebeharrak bete ditzaten.

Publizitate aktiboari dagokionez GFLaren hirugarren xedapen gehigarriak dioenaren arabera, korporazioek behar diren neurriak hartu behar dituzte GFLan aurreikusitako publizitate aktiboko betebeharren ondoriozko informazioak egoitza elektronikoa edo web-gunean egon daitezela, gehienez urtebeteko epean, GFLak indarra hartzen duen egunetik hasita; epe hori 2019ko abuztuaren 23an amaitzen da. Zuzenbide Administrazioaren jardueraren ondoriozko informazio publikoa herritarren eskura jartzeko aginduei dagokionez, GFLaren xedapenak guztiz aplikatzekoak dira 2018ko abuztuaren 23az geroztik.

Gidaren edukari eta egiturari dagokionez, lehenik eta behin, helburua da zuzenbide publikoko korporazioen markoa eta izaera zehaztea, izan ere, GFLaren mendekoak dira, baina ez Administrazio Publikoen neurri be-

rrak betetzeko unean. Gida honen helburua da dokumentu batean biltzea, orientatzeko besterik ez bada ere, gardentasun kultura bat aurrera eramateko informazio garrantzitsuena eta zehatzena, eta, era berezian, korporazioen motibazioan eragitea, GFLan ezarritako betebeharrak bete ditzaten.

\* Gida hau prestatzeko, foru legedira egokitu da Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kontseiluak eta Lanbide Elkarrekin prestatutako Gardentasunari eta Informazio Publikoa Eskuratzeari buruzko Gida. Elkargoentzat eta lanbide elkargoetako eta zuzenbide publikoko korporazioetako kontseiluentzat prestatu zen gida hori. 2016ko abendua.

rean. Bigarrenik, gidak xehetasunez azaltzen ditu GFLarekin egokitzearen ondorioz korporazioek «Zuzenbide Administratiboarekin lotutako jardueri dagokienez» bete beharko lituzketen arloak. Alderdi honi sakontasunez heldu behar zaio, era egokian zehazteko GFLan ezarritakoaren arabera derrigor bete beharreko arloan sartzen diren edo kanpoan geratzen diren gaiak, ahal diren zehaztasunik eta ziurtasunik handienak emanez.

nez heldu behar zaio, era egokian zehazteko GFLan ezarritakoaren arabera derrigor bete beharreko arloan sartzen diren edo kanpoan geratzen diren gaiak, ahal diren zehaztasunik eta ziurtasunik handienak emanez.

## II ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOEN TIPOLOGIA: LEGE ESPARRUA

### 1. LANBIDE ELKARGOAK. NAFARROAKO LANBIDE ELKARGOEI BURUZKO APIRILAREN 6KO 3/1998 FORU LEGEA

Konstituzioaren 36. artikulua jasotzen du lanbide elkargoen figura, eta legeari agintzen dio haien berezitasunak arautu ditzan.

Hona zer ezartzen duen Nafarroako Lanbide Elkargoei buruzko apirilaren 6ko 3/1998 Foru Legeak, bere 2. artikuluan: «Lanbide elkargoak zuzenbide publikoko korporazioak dira, beren helburuak betetzeko nortasun juridikoa eta erabateko gaitasuna dutenak». 4. artikuluan, berriz, hau xedatzen du:

*4. artikulua. Nafarroako Administrazio Publikoekiko lankidetzak.*

*1. Nafarroako Gobernuak, Foru Dekretu bidez, Nafarroako lanbide elkargoengan delegatzen ahalko ditu elkargo horien lanbideari lotutako funtzio administratiboan jardunak, eta Foru Dekretu hori «Nafarroako Aldizkari Ofizialean» argitaratuko da.*

*Foru Dekretu horrek zehaztu beharko ditu eskuordetze horren irismena, edukia, iraupena eta baldintzak, hala nola Nafarroako Gobernuak beretzat gordetzen duen kontrola eta, hala behar izanez gero, horretarako emanen dituen baliabide pertsonalak nahiz ekonomikoak.*

*Nolanahi ere, Nafarroako Gobernuak jarraibide orokorrak agintzen ahalko ditu eta, noiznahi, elkargoaren kudeaketaren inguruko*

*informazioa eskatzen ahalko du, eta orobat ordezkariak bidali eta behar diren errekerimenduak ere egiten ahalko ditu. Jarraibideak, informazio eskaerak edo errekerimenduak betetzen ez direnean, delegatu duen gobernuak uko egiten ahalko dio delegatze horri, edo berak egikaritzen ahalko du delegatutako eskumena.*

*Eskuordetze hori eraginkorra izan dadin elkargo interesdunak onartu beharko du.*

*2. Nafarroako Administrazio Publikoek lankidetzak hitzarmenak egiten ahalko dituzte Nafarroako lanbide elkargoekin eta elkargoen kontseiluekin, elkarren interesekoak diren jardueretan aritzeko.*

### 2. JATORRI DEITURAREN KONTSEILU ARAUEMAILEA

Mahastizaintzari eta Ardogintzari buruzko abenduaren 5eko 16/2005 Foru Legeak bere 20.2 artikuluan ezartzen duenaren arabera

*«jatorri deituraren kudeaketa Kontseilu Arauemaileari esleitzen zaio; bertan ordezkari izanen dute ekoizleek eta merkaturatzaileek, eta jatorri deituraren kudeaketaz arduratzen den zuzenbide publikoko korporazioaren izaera izanen du. Bere nortasun juridikoa du, eta halaber autonomia ekonomikoa, gaitasun juridiko osoa eta bere eginkizunak betetzeko gaitasuna. Zuzenbide publikoaren menpe dago*



*bere sorrerari, antolaketari eta hauteskunde prozedurari dagokienez, hala nola, funtzio edo ahal publikoak betetzeko jarduketari dagokienez.»*

Jatorri Deituren edo Deitura «Espezifikoan» beste hainbat Kontseilu Arauemaile badira, abenduaren 2ko 25/1970 Legean eta haren Erregelamenduan ezarritakoaren haritik sortutakoak (erregelamendu hori martxoaren 23ko 835/1972 Dekretuak onetsi zuen). Horiek bere gain hartzen dituzte Deitura Espezifikoaren defentsa, erregelamenduaren aplikazioa eta betetzen dela zaintzea, eta babestutako produktuaren kalitatearen kontrola eta sustapena ere bai.

Esate baterako, Nekazaritzako, Abeltzaintzako eta Mendietako Kontseilariak 1987ko otsailaren 23an emandako Foru Aginduak, «Nafarroako zainzuria» Deitura Espezifikoaren erregelamendua eta haren Kontseilu Arauemailea argitaratzeko agindua ematen duenak, 3. artikuluan xedatzen du «*Deitura Espezifikoaren defentsa, haren Erregelamendua-ren aplikazioa, hura betetzen dela zaintzea, hala nola babestutako zainzuriaren kalitatearen kontrola eta sustapena, Deitura Espezifikoaren Kontseilu Arauemaileari esleitzen zaizkio.*» Hala ere, «Nafarroako Zainzuria» Deitura Espezifikoak babesten dituen zainzurien ekoizpen-eremuak barne hartzen ditu Nafarroa, Aragoi eta Errioxako lurraldeetan Kontseilu Arauemailearen iritziz behar den kalitateko zainzuriak ekoizteko egokiak diren eremuak. Horregatik, Kontseilu Arauemailea kide anitzeko organoa da, Nekazaritza, Arrantza eta Elikaduraren Ministerioaren mendekoa, Elikaduraren Politikarako Zuzendaritza Nagusiaren bitartez. Beraz, ez dirudi Foru Komunitateak eskumena duenik, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 3/1982 Lege Organikoaren arabera. Ondorioz, Kontseilu hori ez litzateke GFLaren mendeko.

Beraz, Deitura Espezifiko edo Jatorri Deitura bakoitza aztertu behar da, banan-banan

(«Erronkariko Gazta», «Lodosako Pikillo Pipe-rra», «Nafarroako Patxarana», «Tuterako Orburua», etab.).

### 3. NAFARROAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ZERBITZU GANBERA

Merkataritza, Industria eta Zerbitzu Ganbera Ofizialari buruzko apirilaren 10eko 17/2015 Foru Legearen 2.1 artikulua ezartzen duenez, «*Ganbera da zuzenbide publikoko korporazio bat, nortasun juridikoa du eta bere helburuak betetzeko jardute-gaitasun osoa; administrazio publikoen aholkularitza eta lankidetzarako organo bezala taxutu da, baina dituen interes pribatuak kaltetu gabe.*»

### 4. ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOEI BURUZKO OHAR KOMUNAK

Zuzenbide publikoko korporazioek interes pribatu hutsen -korporazioko kideen interesak- ordezkari eta defentsa egiten badituzte ere, pertsona juridiko-publikoen izaera aitortzen zaie, elkartzeko eskubidea gauzatuz sortutako elkarte hutsei ez bezala. Horren justifikazioa da, hain zuzen ere, haiei hainbat funtzio publiko betetzeko jarduerak esleitzen zaizkiela, legez eta, hainbat kasutan, horiez gain, Foru Komunitateak delegazioz esleitutako jarduerak. Funtzio publiko horiek dira, edo zehatzago esanda, funtzio horien legezko esleipen zuzena eta berehalakoa da erakunde horiei zuzenbide publikoko korporazioen izaera emateko bidea ematen duena, haien antolaketa eta funtzionamendu araubide berezia azaltzen baitute.

Zuzenbide publikoko korporazioak entitate bereziak dira, izaera bikoitza, pribatua eta publikoa, dutelako. Alderdi publikoa

agertzen da jarduera pribatuetan aritzearekin lotutako interes publikoaren ikuspegi batetik; alderdi pribatua, berriz, korporazioko kideen interes legitimoen defentsan. Hor-taz, esaterako, jurisprudentziaren arabera, lanbide elkargoak lurraldeko administrazio publikoekin parekatzen dira, elkargoen alderdi publikoari dagokionez, eta alderdi publiko hori legeak esleitzen dizkien funtzioekin soilik lotzen da.

Azkenik, aipatu behar da GFLaren 2.3 artikulua jasotzen dituen entitateen zerrendan

Nafarroako kirol federazioak ere biltzen dituela. Hala ere, legediak ez die aitortzen entitate horiei zuzenbide publikoko korporazioen izaera, entitate pribatutzat jotzen baititu, eta eskuordeturik betetzen dituzten funtzio publikoari buruz ari dela esaten du «Administrazio Publikoaren laguntzaileak» direla. Antzeko arrazoiak aurkitzen dira Nafarroako Kirolari buruzko uztailaren 5eko 15/2001 Foru Legearen 42. artikuluan eta hurrengoetan. Beraz, ez da ulertu behar kirol federazioak gida hone-tan sartzen direla.

# III

## ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOAK GFLan: PUBLIZITATE AKTIBOA ETA INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA

### 1. ARAU-TESTUINGURUA

2.3 artikulua ezartzen duenez, GFLaren xedapenak zuzenbide publikoko korporazioei aplikatzen zaizkie *Zuzenbide Administratiboari lotutako jardunean ari diren aldetik*. Kontzeptu hau zehaztea eta, beraz, GFLaren manuen aplikazioa korporazio publikoetan noraino iristen den zehaztea da abiapuntuko premisa, hain zuzen ere, entitate horiek onartu behar dituzten betebeharrak zehazterakoan.

Lehenik eta behin, azpimarratu behar da zuzenbide publikoko korporazioak GFLaren eremu subjektiboan sartzeak, arestian aipatutako 2.3 artikuluekin bat, alde batetik dakarrela entitate horiek bete behar izatea GFLaren I. tituluaren III. kapituluaren -18. eta 29. bitarteko artikulua- zehazten diren publizitate aktiboko betebeharrak, «Zuzenbide administratiboaren menpeko jardueri» dagokienez; bestalde, horren ondorioz, pertsona guztiek dute entitate horien esku den informazioa eskuratzeko eskubidea. Informazio publikoaren kontzeptu horretan sartzen dira entitate horren esku diren edukiak eta dokumentuak, edozein dela ere haien formatua edo euskarria, betiere entitatearen funtzio publikoaren egikaritzan elaboratu edo bereganatu dituztenak, eta aurrez egikarituta eskubidea, GFLaren III. tituluaren II. kapituluaren -34. eta 44. bitarteko artikulua- araututako prozeduraren arabera.

Eskatzen den informazioa lotuko da, era berean, korporazioek legearekiko duten menpekotasunaren mugarekin, hau da, «Zuzenbide administratiboaren menpeko jardueri» dagokien informazioa izan behar duela eskatutakoak. Zein dira jarduera horiek? Adibidez, Mahastizaintzari eta Ardogintzari buruzko abenduaren 5eko 16/2005 Foru Legeak bere 20.2 artikuluan ezartzen duenez, jatorri izendapenaren Kontseilu Arauemailea «*zuzenbide publikoaren mendekoa da bere sorrera, antolaketa eta hauteskunde prozedurari dagokienez, eta hala-ber funtzio edo eskumen publikoen jardunen ondoriozko jarduketei dagokienez.*»

### 2. ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOEN IZAERA MISTOA (PUBLIKO-PRIBATUA). ZUZENBIDE ADMINISTRATIBOREN MENDEKO EGINTZAK

Auzitegi Gorenak 2011ko martxoaren 7an emandako epaiak honela dio auzi horri buruz:

*Administrazio Korporatiboaren izaera berezi horrek berekin dakar, baita ere, araubide juridiko misto espezifiko bat, alde batetik Zuzenbide Publikoko arautegia eta, bestetik, ezinbestez pribatutzat jo behar diren beste zenbait arau dituen. Oinarri pribatuko ente*

*korporatibo hauen gainean, Estatuaren esku-hartzea haien sorrerarekin hasten da, aginpide-egintza baten bidez, hala aitortzen baitzaio, nolabait, izaera publikoa lanbide zehatz baten jarduerari. Egintza horrek berak lanbide korporazioari ematen dio nortasun juridiko-publikoa, interes orokorreko funtzioak bete dituzan, modu monopolistikoan, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren kontrolpean. Hori ukatu gabe, haien funtzio nagusia ez da publikoa, izan ere, haren funtsezko helburua da korporazioko kideen lanbide komunaren jardueraren ondoriozko interes pribatiboak kudeatzea. Kasu horretan, kide horien arteko gatazkarik sortuz gero, beste Jurisdikzio baten ardura izanen da haien arteko auziak ebaztea.»*

Oinarri pribatukoak izanik funtzio publikoetan ari diren entitateei zuzenbide publikoko korporazioen izaera aitortzea justifikatzen da hainbat interes publiko betetzen dituztelako, besteak beste, lanbide jardueraren ordenamendua, deontologia arauak betetzen direla zaintzea, zehapen eskumena egikaritzea, auzi-errekurtsoak, kontsumitzaile eta erabilitzaileen eskubide eta interesen defentsa, etab, (apirilaren 11ko 3/1998 Foru Legea, Nafarroako Lanbide Elkargoei buruzkoa, 3. artikulua).

Era berean, haien foru lege arautzaileak esleitzen dizkien funtzioen multzotik, betetzen dituzten eginkizun guztien artean, batzuk bakarrik jo daitezke publikotzat, hau da, legeak esleitzen dizkien eta Foru Komunitatearen Administrazioak eskuordetzen dizkien funtzioak (adb. sektorearen interesak ordezkatzeko eta defendatzeko, gai horietan eskumena duten administrazio desberdinen

aurrean; lanbidea arautzea; korporazio horien lankidetzaren administrazio publikoekin, sektorearekin lotutako funtzioetan aritzean; administrazioak eskuordetzean eman dizkien funtzioak, etab.); gainerako funtzioak, interes partikularrei begira betetzen dituztenak dira.

Beraz, erran daiteke funtzio publiko horien jarduera dela Zuzenbide Administrazioari lotzen zaiona, zehatzago, administrazio prezedurari buruzko legediari; gainera, esleitutako funtzio publiko horiek betetzean egindako egintzak izan daitezke administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren xede.

Ildo horretatik, gogora ekar daiteke Zuzenbide Administrazioaren mendeko direla korporazioen antolaketari eta funtzionamenduari dagozkien egintzak, eta haren mendeko dela, baita ere, arautzen dituen legediak esleitzen dizkien edo beste administrazio publikoek eskuordetuz ematen dizkieten funtzio administratiboaren egikaritzea. Ondorio horietarako, Administrazio Publikoaren Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 2.4 artikulua ezartzen duenaren arabera, «Zuzenbide Publikoko Korporazioak beren araudi espezifikuari atxikiko zaizkio, edo modu osagarrian, Lege honi, legeak esleitu dizkien edo administrazio publiko batek eskuordetu dizkien funtzio publikoaren jarduerari dagozkionez». Bestalde, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 2.c) artikulua ezartzen duenaren arabera, «administrazioarekiko auzien jurisdikzioak bere gain hartuko ditu funtzio publikoaren jardueran Zuzenbide Publikoko Korporazioek egindako egintzen eta xedapenen inguruko auziak».

## IV GARDENTASUNARI BURUZKO FORU LEGEA APLIKATZEAN ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOAK LOTZEN DITUEN EREMU OBJEKTIBOAK

### 1. PUBLIZITATE AKTIBOAK

#### A. Publizitate aktiboaren printzipioak (GFLaren 5. art.)

GFLaren eremu subjektiboan sartzen diren entitate guztiei bezala, Foru Komunitateko Administrazioari lotutako korporazioei aplikatzen ahal zaizkie GFLaren 5. artikuluan aurreikusitako irizpide orokorrak. Printzipio orokor horiek, publizitate aktiboari dagozkionez, hauetan bildu daitezke:

- Zuzenbide publikoko korporazioek etengabe eman eta zabaldu behar dute beren esku dagoen eta beren jarduerari buruzkoa den informazioa, egiatasunez eta objektibotasunez; izan ere, publikoa da, printzipioz, haien esku, zaintza-pean edo kontrolpean dagoen informazio guztia, legeak aurreikusten dituen salbuespenak salbuespen.
- Argitaratze aktiboaren betebeharrak bitarteko elektronikoen bidez beteko dira, kode irekiko softwarea erabiliz eta sustatuz, hala nola estandar ireki eta neutralen erabilera, teknologia eta informatikaren arloetan.
- Informazioa modu argian, egituratuan, eskuragarrian eta ulergarrian argitaratu behar da.
- Informazioa argitaratzerakoan kontuan hartu behar dira gardentasunaren ar-

loko betebeharrak GFLaren 31. artikulua ezartzen dizkien mugak eta, batez ere, datu pertsonalen babeserako eskubidea.

#### B. Publizitate aktiboa egiteko betebeharrak

Gardentasunaren arloko betebeharrak egoki betetzeko, GFLaren 11. artikulua ezartzen duenaren arabera, zuzenbide publikoko korporazioek hauek egin behar dituzte:

- Beren jardueretatik Zuzenbide Administrazioaren mendeko direnen gardentasuna bermatzeko zabaldu beharreko informazioa, prestatu, eguneratu, hiru hilean behin gutxienez, eta zabaldu modu iraunkorrean, egiatzekoan eta objektiboan, norberaren egoitza elektronikoen edo webguneen bidez.
- Apartatu honen a) letran aipatzen den informazio publikoaren inbentario bat egin eta hiru hilean behin zabaldu, informazio hori non aurki daitekeen adierazita.
- Informazio publikoa kudeatzeko sistematik eta politikak garatu, haren fidagarritasuna, etengabeko eguneratzea, integritatea eta benetakotasuna bermatzeko.

- d) Informazio publikoa kudeatzeko neurriak hartu, hura lokalizatzea eta zabaltea erraza izan dadin, eta eskuragarritasuna, elkar-eragingarritasuna, kalitatea, egiazkotasunaren kontrola eta argitaratutako informazioaren berrera-bilera sustatzeko.
- e) Informazioa modu argi, egituratu eta ulergarrian argitaratu. Informazio guztia formatu erabilerraz eta ulergarritan egonen da, erabilerraztasun unibertsalaren eta pertsona guztiendako diseinuaren printzipioekin bat.
- f) GFLak pertsonen aitortzen dizkien eskubideak zabaldu, behar bezala erabiltzeko aholku eman erabiltzaileei, eta informazioa bilatzen lagundu.
- g) Informazio publikoa epe hauetan egonen da argitaratuta:
- Izatezko egoerak deskribatzen dituen informazioa argitaratuta egonen da, gutxienez, egoera horiek irauten duten bitartean.
  - Arauei buruzko informazioa arauak indarra duten bitartean, gutxienez.
  - Kontratu, hitzarmen eta dirulaguntzei buruzko informazioa argitaratuta egonen da haietatik heldu diren betebeharrak irauten duten bitartean eta amaitu ondorengo hamar urteetan ere bai, gutxienez.
  - Informazio ekonomikoa sortu zen unetik hasi eta gutxienez hamar urtez egonen da argitaratuta.

mazio publiko, eta batez ere, maizenik eskatzen dena. Horri erantsi behar zaio publizitateari dagokionez araubide zabalagoa aurreikusten duten xedapen berariazkoetan (18.2 artikulua) ezartzen diren publizitate betebeharrak. 7. artikulua arabera, informazioa argitara eman behar da federazioen webguneetan. Horretarako, gomendagarriena izan daiteke Gardentasun Atari bat sortzea, federazio horren egoitza elektronikoan edo webgunean.

Ondoren, orientatzeko besterik ez bada ere, zuzenbide publikoko korporazioen publizitate aktiboaren betebeharren maparen osagaiak deskribatzen dira:

#### a) Informazio instituzionala, antolaketakoa eta garrantzi juridikokoa

- a) Aurrera eramaten dituzten eginkizunak, aplikatu beharreko araubidea eta barne antolaketaren egitura, organigrama eguneratua erantsita, eta bertan adierazita haien organoen egoitzak eta kontaktatzeko bideak.
- b) Gobernu Batzordeen bileretako aktak.

Lanbide Elkargoen Gobernu Batzordeetako akte dagokienez, Administrazioekiko Auzien 6. Epaitegi Zentralak 2018ko otsailaren 23an emandako epaiak (prozedura arrunta 35/2017) adierazten du ezen «Argi dago Gobernu Batzordearen funtzionamenduaren araubidea, deialdia, erabakiak hartzeko araubidea eta, zehatzago erranda, elkargoen gobernu organoek hartutako erabakien inguruko dokumentazioa, zuzenbide publikoko jarduerak direla, hori ondorioztatzen baita 40/2015 Legearen ezarpen osagarritik. Lege horretara bideratzen du Espainiako Abokatzaren Estatutu Orokorra onartzen duen ekainaren 22ko 658/2001 Errege Dekretuaren 99.2 artikulua. Beraz, aipatutako akta horietan jasotako informazioa publikoa da eta eskatzen dutenen

eskura jarri behar da, muga bakarra dela datuen babesaren bermea, izan ere, ezin baita onartu aitzakiatzat jartzea aktetan zuzenbide administratiboaren menpeko gaiak daudela edo zuzenbide pribatukoak, esandakoa frogatu edo egiaztatu gabe».

#### b) Informazio ekonomikoa, aurrekontuei buruzkoa eta estatistikoa

Ondoren zehazten da agindu hau betetzeko zein informazio eta norainokoa argitaratu behar duten zuzenbide publikoko korporazioek:

##### • Kontratu publikoak

Zuzenbide publikoko korporazioak botere adjudikatzaileak dira?

Behin baino gehiagotan adierazi du jurisprudentzia europarrak (Europako Batasuneko Justizia Epaitegiaren 2017ko urriaren 5eko epaia) entitate bat botere adjudikatzailea dela hiru baldintza metagarri betetzen direnean, alegia, a) entitate hori berariaz egina izatea interes orokorreko eginkizunak, industria edo merkataritza izaerarik gabekoak, betetzeko; b) nortasun juridikoa izatea; c) haren jardura gehienbat botere publikoek finantzatua izatea, edo haren kudeaketa kontrolatua, edo bestela, haren administrazio, zuzendaritza edo zaintzako organoetako kideen erdiak baino gehiago botere publikoek izendatuak izatea.

Kontratazio Publikoari buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 4.1 artikulua ezartzen duenaren arabera, honako entitate hauek hitzartutako kontratu publikoari aplikatuko zaie:

«e) Enpresa-entitate publikoak eta zuzenbide publikoko entitateak, partzuergoak, merkataritza- eta lan-sozietateak, fundazioak edo beste entitate batzuk edo horietako edozein

elkartek, nortasun juridikoa badute, publikoa nahiz pribatua, eta aurreko letretan aipatutako entitateei loturik badaude edo haien mendekoak badira, eta betiere baldintza hauek **biak** betetzen badituzte:

1. Beren jardueraren bidez, neurri batean bederen, interes publikoko helburuak beten badituzte, industria edo merkataritza izaerarik ez dutenak, eta enpresa arriskurik beren gain hartzen ez dutenak.

2. Administrazio publikoek, zuzenean edo zeharka, haien jardueraren erdia baino gehiago finantzatzen badute, edo haien jardueraren gain eragin nagusia badute, kudeaketa kontrolatzeko mekanismoen bitartez edo administrazio, zuzendaritza nahiz zaintza organoetako kideen erdiak baino gehiago izendatzea ahalbidetzen duten mekanismoen bitartez.»

Zuzenbide publikoko korporazioei dagokienez, Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioak ez ditu izendatzen haien administrazio, zuzendaritza edo zaintzako organoen kideen erdiak baino gehiago, eta finantzazioa gehienbat Administrazioaren kargu izateko baldintza ere ez da betetzen, izan ere, haien diru-iturri nagusiak hauek dira: korporazio kideek ordaintzen dituzten kuotak edo derramak eta kideen alde nahiz elkartearen alde egiten dituzten jardueretatik eta zerbitzuetatik lortzen dituzten produktu eta etekinak.

Bestalde, ezin da ulertu Foru Komunitatearen Administrazioaren babesak, korporazioen zenbait egintzaren gainean ondoren egiten duten kontrolaren bidez egiten denak, eragin erabakigarria izan dezakeen korporazioen erabakietan. Erabaki horiek eskatzen zituen Europako Komunitateen Justizia Auzitegiak 2003ko otsailaren 27an emandako epaiak, eta hark finkatu zituen kudeaketaren kontrolaren beharkizun horren izaera orokorra.

Beraz, ondorioztatu daiteke zuzenbide publikoko korporazioek ez dutela bete behar Kontratu Publikoari buruzko Foru Legea, ez baitituzte betetzen adjudikatzaile izateko 4.1 ar-

## C. BETEBEHARREN MAPA

Ondoren deskribatzen diren zerrendak ulertu behar dira, GFLaren aplikazioan, informazio publikoaren gutxienezko betebeharrak gisa, izan ere, horrez gain, 29. artikulua ezartzen duenaren arabera, argitara eman beharko da herritarren interesekotzat jotzen den beste edozein infor-

tikuluan ezarritako gutxieneko baldintzak (horrer haritik, ikus LÓPEZ BENÍTEZ «Algunas consideraciones a propósito del ámbito subjetivo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017. En particular, el caso de las Corporaciones de Derecho público», DAn argitaratua, aro berria, 4 zk., 2017, 140 or. eta ondokoak).

Hala ere, kontuan izanik ezen, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean ezarritakoarekin bat, administrazioarekiko auzien jurisdikzioak bere gain hartzen dituela funtzio publikoen jardueran zuzenbide publikoko korporazioek egindako egintzak; eta bestalde, Administrazio Publikoaren Administrazio Prozedura Erkidegoari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 2.4 artikulua ezartzen duela «Zuzenbide Publikoko Korporazioak beren araudi espezifikoa atxikiko zaizkio, lege esleitu zaizkien edo Administrazio Publiko batek, edo modu osagarrian, lege honek, eskuordetu dizkien funtzio publikoen jarduerari dagokionez», ondorioztatu daiteke, baita ere, korporazioen betebeharrak dela argitaratzea eta publikoaren eskura jartzea Kontratu Publikoari buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legean aipatzen diren kontratuak, **haien xedea denean esleitu zaion funtzio publiko baten jardueraren proiektzioa.**

Gainera, LÓPEZ BENÍTEZek, aipatutako lanean, 140. orrialdean, dioenez «ez dirudi eragozpenik jarri behar denik zuzenbide publikoko korporazioek egindako zenbait kontratu jarri behar badira -intentsitate handiago edo txikiagoz- kontratu publikoaren araudiaren menpe. Hala da, izan ere, egiten dituzten kontratuak modu zuzenean eta %50etik gorako portzentajearekin botere adjudikatzailearen batek diruz laguntzen dituenen.»

Kasu horietan, ondoko hau argitaratuko dute:

- Xedea, kontratu mota eta kontratazio organoa.
- Formalizazio data.
- Exekuzioaren hasiera eguna.
- Iraupena.

- Adjudikaziorako erabilitako prozedura.
- Lizitazioaren eta adjudikazioaren zenbatekoak.
- Parte hartzen duten lizitatuak kopurua, onartu eta baztertu direnak identifikatuta, eta, kasua bada, prozeduran hautatu direnak.
- Adjudikazio-hartzailearen identitatea.
- Adjudikazio-hartzailearen kaudimen teknikoak eta ekonomikoak.
- Adjudikaziorako irizpideak, bai balorazio automatikoa egitekoak, bai judizio-balioaren eta ponderazioaren mende daudenak.
- Eskaintza ekonomikoak, proposamen teknikoak eta hobekuntzak konparatzen dituen taula, baldin badaude, puntuazio guztiak adierazita irizpide bakoitzaren arabera, eta arrazoen laburpena. Erabaki eta txosten juridikoak, teknikoak eta kontu-hartaitzakoak, kontratazio prozesuarekin lotutakoak.
- Kontratazio prozesuarekin lotutako txosten juridikoak, teknikoak eta kontu-hartaitzakoak.
- Onetsitako aldaketak, kontratu osagarriak eta kontratuen luzapenak.
- Kontratuaren lagapenari eta azpikontratazioari buruzko informazioa, zehaztuta lagapen-hartzaileen edo azpikontratisten identitatea, zenbatekoa, eta kontratu bakoitzean azpikontratatu den bolumenaren portzentajea.
- Kontratuaren amaieran egindako likidazioaren zenbatekoa.
- Prezioen berrikuspenari buruzko informazioa, bai eta kontratatutako preztazioaren amaierako kostuan izandako desbideratzea, adjudikatutako zenbatekoarekin alderatuta.

#### • Hitzarmenak

Korporazioa aritzean esleitu zaizkion funtzio publikoetan, sinatu dituen hitzarmenak ar-

gitaratu behar dira. Publizitate horrek kontzeptu hauek jasoko ditu:

- Alderdi sinatzaileak
- Helburua
- Iraupen epea
- Egindako aldaketak
- Betebeharrak, barnean sartuta, halakorik balego, haien ondoriozko betebeharrak ekonomikoak.

Argitara emanen diren kontratu eta hitzarmenetan jasotzen diren datu pertsonalak argitaratzeari dagokionez, korporazioak bete behar du Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kontseiluak eta Datuen Babeserako Agentzia Espainiarrak, biek ala biek, sinatutako 2015eko 4. interpretazio-irizpidea.

#### • Kudeaketa esleipenak

Zuzenbide publikoko korporazio batek, betetzen dituen funtzio publikoetan aritzean, kudeaketa esleipen bat egiten duenean, ondoko datu hauekin argitaratuko da:

- Esleipena zer entitateri egin zaion eta iraupena.
- Esleipena egiten duen organoak edo entitateak bere bitarteko pertsonalekin zerbitzuak ez ematea justifikatzen duten arrazoiak eta, hala badagokio, zerbitzu hori sektore publikoko kontratuen gaineko legerian aurreikusitakoari jarraikiz ez lizitatzea egiaztatzen duten arrazoiak.
- Esleipena egiten duen korporazio publikoaren erabakiz, esleipena hartu duenaren esku jarriko diren baliabide materialak, lan hori egiteko.
- Esleipen bakoitzean sartutako pertsonen kopurua eta lanbide kategoriak, bai eta langileria gastuetarako erabiliko den zenbateko osoa ere.
- Esleipenaren xedea eta betebeharrak ekonomikoak, barnean hartuta ezarritako tarifak edo prezioak.
- Aurrekontuaren eta prezioen aldaketak eta berrikuspenak, bai eta esleipenaren amaierako likidazioa ere.

- Azpikontratazioak, egin badira, adierazita horretarako erabilitako prozedura, pertsona edo entitate adjudikazio-hartzailea eta adjudikazioaren zenbatekoa.
- Baliabide berekiak kontrol enteen alde egindako jardueraren portzentajea adieraziko da, ekitaldi bakoitzeko.

#### • Ekonomia eta aurrekontuak erabiltzeko egintzak

2011ko martxoaren 7ko Auzitegi Nagusiaren Epaiaren arabera:

*«Hala ere, aurreko zuzenbide-oinarrian aurreratu genuenez, Administrazio Publikoetatik bereizten dira, beren jarduerari gehiena ez delako Zuzenbide Administrazioaren mendeko: haien langileak ez dira funtzionario publikoak; haien finantzak ez dituzte kontrolatzen, ez Estatuaren Kontu-hartzaileak, ez eta Kontuen Auzitegiak ere; eta haiek sortzeko Administrazioak duen helburua da funtzioen deszentralizazioa eta, beraz, interes publikoekin lotutako eginkizunak ematen dizkie, esku-hartze zuzeneko ente publikoak sortzea saihestuz.*

*Horregatik, elkarteekin eta sindikatuekin bat egiten duen elementuetako bat da korporazioaren sostengu ekonomikoa, gainera, haren izaera batez ere pribatua adierazten duena. Sostengu hori korporazioaren kideei dagokie, berez finantzazio publikorik gabe, dirulaguntzen bidez dagokiona ez bada. Horrenbestez, finantza-autonomia dute».*

Beraz, Auzitegi Nagusiaren jurisprudentzia finkatuaren arabera, zuzenbide publikoko korporazioek finantza-autonomia dute eta haien finantzak ez dituzte kontrolatzen ez Foru Komunitatearen Administrazioaren Kontu-hartzaileak, ez eta Kontuen Ganberak ere. Hortaz, aurrekontuak erabiltzeko beste edozein egintza, eta zehatzago erranda, ematen dituzten dirulaguntzak, aurrekontuak, urteko kontuak edo korporazioaren ar-



duradunek jasotzen dituzten diru-sariak **ez daitezke jo informazio publikotzat** GFLaren arabera eta, beraz, ez da beharrezkoa haiek argitaratzea.

Hala ere, borondatezko gardentasun ariketa egitera gonbidatzen ditu Gardentasunaren Kontseiluak zuzenbide publikoko korporazioak, argitara eman ditzaten, bederen, sarrera eta gastuen aurrekontua, korporazioaren urteko kontua eta kanpoko auditorien txostenak.

## 2. INFORMAZIO PUBLIKOAK ESKURATZEKO ESKUBIDEA

GFLa bete behar duten entitateak izanik, zuzenbide publikoko korporazioek erantzun behar diete informazioa eskuratzeko egiten zaizkien eskaerei, **informazio hori beren funtzio publikoen jardueran elaboratu edo lortu badute.**

### A. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen egikaritzea

Informazioa eskatzen duen pertsonak ez du zertan argitu zergatik eskatzen duen. Hala ere, arrazoi horiek azaltzen ahal ditu, eta kontuan hartzen ahal dira, ebazpena ematerakoan. Nolanahi ere, arrazoirik ez emate hutsagatik ezin izanen da eskaera atzera bota.

Eskaera aurkez daiteke eskatzailearen nor-tasunaren berri izateko modua eskaintzen duen edozein bidetatik, eta ez da beharrezkoa izanen haren egiaztatpena.

Eskaeran argi eta zehatz adierazi behar da zer informazio eskatzen den, eskuratzeko nahi den forma edo formatua, eta harremanetarako helbide bat, elektronikoa ahal bada, komunikazioak errazteko.

Eskatzaileak informazio hori aski argi eta zehatz adierazten ez duenean, hamar egu-

neko epean zehazteko eskatuko zaio, bitartean bertan behera utziz gehieneko ebazteko epea eta ohartaraziz, hala egiten ez badu, uko egiten diola ulertzen ahal dela. Nolanahi ere, laguntza emanen zaio bere eskaera zehaztu dezan.

Informazio publikoaren ardura duten unitateek eta informazio bulegoek, bai eta eskaera aurkeztu edo zuzentzen den organo edo entitateak ere, behar den laguntza emanen dute informazioa eskuratzeko eskubidearen egikaritzea errazteko, eskaera egiteko erabiltzen den bitartekoa edozein dela ere, kolektibo batzuen behar bereziak kontuan hartuta.

Administrazioarekiko Auzien 6. Epaitegi Zentralak 2018ko otsailaren 23an emandako epaiak (prozedura arrunta 35/2017) adierazten du ezen «gai horiek publizitate aktiboaren betebeharrak atxikiak izanik ere, horren ondorioz ezin da ukatu eskatutako informazioa eskuratzeko herritarrek duten eskubidea, argitara eman den informazioarekin, osotara edo hein batean, bat egiten badu ere, Legeak berak bereizten baititu gardentasun printzipioaren arabera ezarritako betebeharrak. Horregatik, alde batetik, publizitate aktiboa eskatzen du, eta bestetik, III. kapituluak (12. artikulua eta hurrengoak) informazio publikoa eskuratzeko eskubidea aitortzen du, eskubide subjektibo hau ezin eragotzi edo baldintzatu delarik, publizitate aktiborako Legeak ezartzen dituen betebeharrak betetzeagatik».

### B. Eskubidea egikaritzeko prozeduraren inguruko oharra

Lanbide elkargoek argi adierazi behar dute, beren webgunean, beren esku duten informazioa eskatzeko eskubidea dutela herritarrek, eta eskubide hori gauzatzeko prestatu dituzten bideak modu argian eskaini behar dituzte.

Erantzunak kontuan izan behar du gerta daitekeela informazioa eskuratzeko eskubi-

deak mugaren bat izatea, besteak beste, GFLaren 31. artikuluan ezarritakoak, edo 32. artikuluko datu pertsonalen babeserako eskubidearen ingurukoak, eta halaber GFLaren 37. artikulua eskaera ukatzeko aurreikusitako arrazoiak bat.

Ematen den erantzunean, adierazi behar da erreklamazioa aurkezten ahal dela Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean, eskaeraren erantzuna jakinarazten den egunetik hasi eta hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, epaitegi eskudunean, bi hilabeteko epean.

Kasu bakoitzean ebazteko eskumena duen organoak lehenbailehen eman beharko du eskatutako informazio publikoa, edo, bestela, lehenbailehen jakinaraziko dizkio eskatzaileari informazio hori ukatzeko arrazoiak, beranduena hilabete batean, eskaera korporazioaren erregistroan sartzen denetik kontatuta, oro har. Informazioa ukatzeko arrazoiak hirugarrenek jabetza intelektualeko edo industrialerako eskubidea edukitzea baldin bada, eskubide horien titularrak den pertsona fisikoa edo juridikoa zein den adierazi beharko da, ezaguna izanez gero, edo, bestela, zeinek laga duen eskatutako informazioa.

Epe hori hilabete bat gehiago luzatzen ahal da, baldin eta, informazioaren bolumena eta konplexutasuna ikusita, ezinezkoa bada lehen adierazitako epean ematea. Kasu horretan, hamar eguneko epean gehienez, eskatzaileari adierazi behar zaio zer arrazoi izan diren ebazpena epe horretan emateko.

Eskaerak hirugarrenen eskubide edo interes legitimoak ukitzen baditu, hamabost eguneko epea emanen zaie haiei alegazioak egiteko. Alegazio horiek kontuan hartuko dira eskaera onartu ala ez erabakitzeke, baina ezin dira betoa izan informazioa eskuratzeko eskubidea ukatzeko.

Eskaera ez tramitatzea erabakitzen ahal da, korporazioaren funtzio publikoen jardueran sortu edo lortu ez den informaziori buruzkoa bada.

## C. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen egikaritzea proiektatu dezaketen eremu materialak

Lehen azaldu den moduan, zuzenbide publikoko korporazioek GFLaren 18. eta 29. bitarteko artikuluetan zehazten diren publizitate aktiboko betebeharrak bete behar dituzte, «Zuzenbide Administrazioaren mendeko jarduerari» dagokienez; era berean, pertsona guztiak dute entitate horien «Zuzenbide Administrazioaren mendeko jarduerari» dagokien informazioa eskuratzeko eskubidea, aurretiaz egikaritzea eskuratzeko eskubidea - GFLaren 30. eta 44. bitarteko artikulua-.

Kasu horien artean aipa daitezke, **orientatzeko besterik ez bada ere**, zenbait arlo material, haien gainean proiektatu baitaiteke Zuzenbide Administrazioaren mendeko jarduerari buruzko informazio publikoa eskuratzeko eskubidea; esaterako:

- Zuzenbide publikoko korporazio horren hauteskunde prozedurari buruzko informazioa, sufragio aktibo eta pasiboaren eskubidearekin lotutako informazioa biltzen duena; hauteskunde deialdia; hautagaitzen aurkezpena; hautesle-errol-daren elaborazioa; hauteskunde mahaia-aren osaera eta mahaiburuen eskumena; boto-papera; botoa egiaztatzeke modua; posta bidezko botoa; boto-kontakteta; dagokion aktaren elaborazioa; eta, azkenik, hautatutako izangaien kargu-jabetzea, horren mugatzailea dela GFLaren 32. artikuluko datuen babesaren bermetik eratoritzen dena, adibidez, hautesle-errol-dari dagokiona.
- Gobernu organoen aktak, erabakiak edo ebazpenak, dagokion arautegian aurreikusitako jardueratik Zuzenbide Administrazioaren mendeko diren funtzioak betetzearekin lotutakoei buruzkoak direnak, horien muga dela GFLaren 32. artikuluko datuen babesaren bermetik eratoritzen dena.